



SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP
República del Perú

PREPUBLICACIÓN

Lima,

Resolución S.B.S.
N° -2014

El Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 27693, se crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF-Perú, encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo (LAFT), así como de coadyuvar a la implementación por parte de los sujetos obligados, del sistema para detectar operaciones sospechosas de LAFT;

Que, el artículo 3° de la Ley N° 27693, modificado por el Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros Delitos Relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado, establece que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a través de la Unidad de Inteligencia del Perú (UIF –Perú) tiene la función y facultad de regular en coordinación con los organismos supervisores de los sujetos obligados, los lineamientos generales y específicos, requisitos, precisiones, sanciones y demás aspectos referidos a los sistemas de prevención del LAFT;

Que, mediante la Resolución SBS N° 838-2008 y sus normas modificatorias se establecieron las Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo que son aplicables a las empresas señaladas en los artículos 16° y 17° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus normas modificatorias (en adelante, Ley General), al Banco Agropecuario, al Banco de la Nación, al Fondo de Garantía para la Pequeña Industria – FOGAPI, a las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE, al Fondo Mivivienda S.A., a los corredores de seguros y a las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recursos del público, en lo que les resulte aplicable;

Que, resulta necesario modificar las normas antes mencionadas con la finalidad de establecer criterios adicionales en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, considerando para tal efecto los estándares internacionales, las mejores prácticas sobre la materia, así como aquellos aspectos identificados como producto de la labor de supervisión;

Que, a efectos de recoger las opiniones del público en general respecto a la presente propuesta normativa, se dispone su prepublicación, al amparo de lo señalado en el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS;



Contando con el visto bueno de las Superintendencias Adjuntas de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y Seguros, de Banca y Microfinanzas, de Riesgos, de Asesoría Jurídica y la UIF-Perú; y,

En uso de las atribuciones conferidas por los numerales 7 y 10 del artículo 349° y por la Décimo Cuarta y Vigésimo Cuarta Disposición Final y Complementaria de la Ley General;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo:

REGLAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

TÍTULO I
GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE LA/FT

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Alcance

El Reglamento es de aplicación, según corresponda, a las empresas señaladas en los artículos 16° y 17° de la Ley General, al Banco Agropecuario, al Banco de la Nación, al Fondo de Garantía para la Pequeña Industria – FOGAPI, a las administradoras privadas de fondos de pensiones, a la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE, al Fondo Mivivienda S.A., a los corredores de seguros y a las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a operar con recursos del público, en adelante empresas.

Artículo 2°.- Definiciones y abreviaturas

Para efectos de lo dispuesto en el Reglamento, considérense las siguientes definiciones y abreviaturas:

- a) Corresponsalía financiera: prestación de servicios financieros por una empresa comprendida en el alcance del Reglamento hacia otra persona jurídica nacional o extranjera de la misma naturaleza.
- b) Días: días calendario.
- c) Directorio: directorio de las empresas o cualquier órgano de gobierno equivalente o que haga sus veces.
- d) Entes jurídicos: son i) patrimonios autónomos gestionados por terceros, que carecen de personalidad jurídica o ii) contratos en los que dos o más personas, que se asocian temporalmente, tienen un derecho o interés común para realizar una actividad determinada, sin constituir una persona jurídica. Entre otros determinados por la Superintendencia, se consideran en esta categoría a los fondos de inversión, fondos mutuos de inversión en valores, patrimonios fideicometidos y consorcios.
- e) LA/FT: lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
- f) Ley General: Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus normas modificatorias.
- g) Ley: Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú – UIF-Perú, Ley N° 27693 y sus normas modificatorias y complementarias.



- h) Manual: manual de prevención y gestión de los riesgos de LA/FT.
- i) Mercado: conjunto de personas naturales o jurídicas que participan en la adquisición o utilización de un producto o servicio ofrecido por las empresas. La participación puede ser directa o a través de terceros, física o virtual, entre otras.
- j) Oficial de cumplimiento: persona natural responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención de LA/FT. Es la persona de contacto del sujeto obligado con la Superintendencia y un agente en el cual esta se apoya en el ejercicio de la labor de control y supervisión del sistema de prevención de LA/FT.
- k) Operación inusual: operación cuya cuantía, características y periodicidad no guarda relación con la actividad económica del cliente, sale de los parámetros de normalidad vigente en el mercado o no tiene un fundamento legal evidente.
- l) Operación sospechosa: operación realizada o que se haya intentado realizar, cuya cuantía o características no guarda relación con la actividad económica del cliente o que no cuenta con fundamento económico; o que, por su número, cantidades transadas o las características particulares de estas, puede conducir razonablemente a sospechar que se está utilizando al sujeto obligado para transferir, manejar, aprovechar o invertir recursos provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación.
- m) Personas expuestas políticamente (PEP): personas naturales, nacionales o extranjeras, que cumplen o que en los últimos cinco (5) años hayan cumplido funciones públicas destacadas o funciones prominentes en una organización internacional, sea en el territorio nacional o extranjero, y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público.
- n) Proveedor: persona que proporciona a las empresas bienes o servicios que se encuentran relacionados con su objeto social.
- o) Reglamento: Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, aprobado por la Superintendencia.
- p) Reglamento de la Ley: Reglamento de la Ley que crea la UIF-Perú, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2006-JUS.
- q) Riesgos de LA/FT: posibilidad que la empresa sea utilizada para fines de LA/FT. Esta definición excluye el riesgo de reputación y el operacional.
- r) Superintendencia: Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
- s) UIF-Perú: Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, unidad especializada de la Superintendencia.
- t) Vinculación y grupo económico: conceptos definidos en las Normas Especiales sobre Vinculación y Grupo Económico.

Artículo 3º.- Sistema de prevención del LA/FT

Las empresas deben implementar un sistema de prevención del LA/FT mediante la gestión de los riesgos de LA/FT a los que se encuentran expuestos. La gestión de riesgos de LA/FT comprende, entre otros procedimientos y controles detallados en el Reglamento, aquellos vinculados a la detección oportuna y reporte de operaciones sospechosas, con la finalidad de evitar ser utilizadas con fines vinculados con el LA/FT.

El sistema de prevención del LA/FT está conformado por las políticas y procedimientos establecidos por las empresas en el marco de la Ley, el Reglamento de la Ley, la Ley General en lo que corresponda, el Reglamento y demás disposiciones sobre la materia, para lo cual deben desarrollar una metodología de identificación y evaluación de riesgos acorde con la naturaleza y dimensión de su actividad comercial.

El sistema de prevención del LA/FT tiene componentes de cumplimiento y de gestión de riesgos de LA/FT. Las empresas deben efectuar evaluaciones periódicas del funcionamiento del sistema de prevención del LA/FT en función a su perfil de riesgos de LA/FT, las cuales deben constar en un informe técnico, conjuntamente con la documentación e información que los sustente.



Los parámetros empleados para desarrollar la metodología de identificación y evaluación de riesgos deben ser revisados y/o actualizados, con una periodicidad mínima de dos (2) años.

Artículo 4º.- Factores de riesgos de LA/FT

La identificación de los factores de riesgos de LA/FT está orientada a una gestión de riesgos eficiente. Entre los principales factores de riesgos de LA/FT que deben ser considerados por las empresas se encuentran:

a) Clientes.-

Las empresas deben gestionar los riesgos de LA/FT relacionados a los clientes, su comportamiento, antecedentes y actividades, al inicio y durante toda la relación comercial originada por la celebración de un contrato, o del vínculo que mantienen con la empresa. El análisis asociado a este factor de riesgos de LA/FT incorpora, según sea conveniente, los atributos o características de los clientes.

b) Productos y/o servicios.-

Las empresas deben gestionar los riesgos de LA/FT asociados a los productos y/o servicios que ofrecen por cuenta propia o de terceros, durante la etapa de diseño o desarrollo, así como durante su vigencia. El análisis asociado a este factor de riesgos de LA/FT incluye los riesgos vinculados a los canales de distribución y medios de pago con los que operan, antes y después del lanzamiento de los productos y/o servicios.

c) Zona geográfica.-

Las empresas deben gestionar los riesgos de LA/FT asociados a las zonas geográficas, tanto a nivel local como internacional, tomando en cuenta sus características de seguridad, económico-financieras y socio demográficas, entre otras. El análisis asociado a este factor de riesgos de LA/FT comprende las zonas en las que opera la empresa, así como aquellas vinculadas al proceso de la operación.

CAPÍTULO II
AMBIENTE INTERNO

SUB CAPÍTULO I
ROLES Y RESPONSABILIDADES

Artículo 5º.- Responsabilidad del directorio

El directorio es responsable de implementar el sistema de prevención del LA/FT y de propiciar un ambiente interno que facilite su desarrollo. Para ello, es responsabilidad del directorio:

- a) Tomar en cuenta los riesgos de LA/FT al establecer los objetivos empresariales.
- b) Aprobar y revisar periódicamente las políticas y procedimientos para la gestión del riesgo de LA/FT.
- c) Establecer y revisar periódicamente el funcionamiento del sistema de prevención del LA/FT en función al perfil de riesgos de LA/FT.
- d) Designar a un oficial de cumplimiento con las características, responsabilidades y atribuciones que la normativa vigente establece.
- e) Asegurar que se mantenga la confidencialidad del oficial de cumplimiento, para que esta no sea conocida por personas ajenas a la empresa.



- f) En caso corresponda, aprobar la creación de un comité de prevención del LA/FT, debiendo establecer su forma de integración, funciones y atribuciones.

Adicionalmente, las empresas que formen parte de grupos económicos deben contar con políticas y procedimientos a nivel de grupo en materia de gestión de riesgos y prevención del LA/FT, incluyendo aquellos aspectos aplicables para intercambiar información dentro del grupo.

Lo expuesto resulta aplicable sin perjuicio de las responsabilidades contempladas en las normas sobre la gestión integral de riesgos y otras normas relacionadas dictadas por la Superintendencia.

Artículo 6°.- Responsabilidad de la gerencia

La gerencia general, conjuntamente con el directorio, tiene la responsabilidad de implementar el sistema de prevención del LA/FT conforme a la regulación vigente; así como proveer los recursos e infraestructura necesarios para el adecuado cumplimiento de las funciones y responsabilidades del oficial de cumplimiento.

Los gerentes de las unidades organizativas de negocios o de apoyo, en su ámbito de acción, tienen la responsabilidad de cumplir con las medidas asociadas al control de los riesgos de LA/FT, conforme a las políticas y procedimientos definidos, apoyando al oficial de cumplimiento en el desarrollo de su labor.

Lo expuesto resulta aplicable sin perjuicio de las responsabilidades contempladas en las normas sobre la gestión integral de riesgos y otras normas relacionadas dictadas por la Superintendencia.

Artículo 7°.- Oficial de cumplimiento

El oficial de cumplimiento debe tener vínculo laboral directo, a tiempo completo y exclusivo con la empresa. Asimismo, debe ser designado por el directorio, depender y reportar directamente a dicho órgano de gobierno y gozar de autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

El oficial de cumplimiento debe encontrarse en la categoría de primer nivel gerencial, considerando en esta a aquellos gerentes que son directos colaboradores del gerente general en la ejecución de las políticas y decisiones del directorio. En concordancia con lo expuesto, debe contar con los beneficios propios del primer nivel gerencial, los cuales deben ser consistentes con los beneficios que correspondan a los demás gerentes de dicha categoría en la empresa.

Para los fines del Reglamento, el requisito de nivel gerencial no comprende el cargo de subgerente o cargo similar.

Artículo 8°.- Requisitos del oficial de cumplimiento

El oficial de cumplimiento debe reunir, por lo menos, los siguientes requisitos:

- a) No ser director o asesor del directorio, gerente general o gerente de alguna de las áreas directamente relacionadas con las actividades previstas en el objeto social de la empresa.
- b) No haber sido declarado en quiebra, ni condenado por la comisión de delitos dolosos o estar incurso en los demás impedimentos señalados en el artículo 365° de la Ley General. Con relación al impedimento señalado en el numeral 1 del referido artículo, el oficial de cumplimiento no puede ser titular de acciones de empresas supervisadas por la Superintendencia, cuya tenencia pudiera ocasionar un conflicto de intereses con la labor que desempeña.
- c) No ser ni haber sido el auditor interno de la empresa durante los seis (6) meses anteriores a su nombramiento.
- d) Para el caso de las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a operar con recursos del público, no estar incurso en los impedimentos del artículo 33° de la Ley General de Cooperativas.



- e) En el caso del oficial de cumplimiento corporativo, no puede mantener participaciones u acciones en alguna de los integrantes del grupo económico, cuya tenencia pueda ocasionar un conflicto de intereses con la labor que desempeña.
- f) Contar con capacitación y/o experiencia asociada a la prevención del LA/FT y gestión de riesgos.
- g) Otros que establezca la Superintendencia.

Los requisitos establecidos en el presente artículo deben mantenerse vigentes durante el ejercicio del cargo. Si el oficial de cumplimiento dejara de cumplir con alguno de dichos requisitos, no puede seguir actuando como tal en la empresa, sin perjuicio de las responsabilidades de Ley, por lo que debe comunicarlo por escrito a la empresa en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho. En este caso, la empresa debe designar a un nuevo oficial de cumplimiento que cumpla los precitados requisitos.

Artículo 9°.- Designación, remoción y vacancia del cargo de oficial de cumplimiento

Las empresas deben informar a la Superintendencia la designación del oficial de cumplimiento, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles de producida, mediante comunicación dirigida a la UIF-Perú, señalando como mínimo: nombres y apellidos, tipo y número de documento de identidad, nacionalidad, domicilio, dirección de la oficina en la que trabaja, datos de contacto (teléfono y correo electrónico), currículum vitae, la fecha de ingreso, si es a dedicación exclusiva o no, el cargo que desempeña en la empresa y una declaración jurada referida al cumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 7° y 8° del Reglamento. Cualquier cambio en la información del oficial de cumplimiento debe ser comunicado por la empresa a la UIF-Perú, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de ocurrido.

Las empresas pueden designar, en dicho momento o posteriormente, a un oficial de cumplimiento alternativo, cumpliendo con los mismos requisitos establecidos en el presente artículo, para que se desempeñe como oficial de cumplimiento únicamente en caso de ausencia temporal o remoción del titular. El período de ausencia no puede durar más de cuatro (4) meses y debe ser comunicado por escrito a la UIF – Perú.

Las referidas comunicaciones deben observar las medidas de seguridad con el fin de proteger la identidad del oficial de cumplimiento y del oficial de cumplimiento alternativo. Adicionalmente, para proteger su identidad, la UIF-Perú asigna códigos secretos a la empresa, al oficial de cumplimiento y al oficial de cumplimiento alternativo, luego de verificada la documentación e información a que se refiere el presente artículo.

La remoción del oficial de cumplimiento debe ser aprobada por el directorio, así como comunicada a la Superintendencia, dentro de cinco (5) días hábiles de adoptada la decisión, remitiendo un informe aprobado por el directorio, que fundamente las razones que justifican tal medida. La situación de vacancia del cargo del oficial de cumplimiento no puede durar más de treinta (30) días.

Artículo 10°.- Del ejercicio de funciones del oficial de cumplimiento alternativo

En aquellos casos en los que se requiera que un oficial de cumplimiento alternativo realice las funciones establecidas en la presente norma; sin perjuicio de dar cumplimiento a las disposiciones contempladas en el artículo precedente, se debe comunicar a la UIF-Perú, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles previos a la ausencia del titular, el período y las razones que sustentan su ausencia, a fin de que el oficial de cumplimiento alternativo pueda sustituirlo.

Artículo 11°.- Responsabilidades y funciones del oficial de cumplimiento

Las responsabilidades y funciones del oficial de cumplimiento son las siguientes:

- a) Proponer las estrategias de la empresa para prevenir y gestionar los riesgos de LA/FT.
- b) Vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención de LA/FT.



- c) Evaluar y asegurar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados en el sistema de prevención del LA/FT, según lo indicado en el Reglamento, incluyendo el registro de operaciones y la detección oportuna y reporte de operaciones sospechosas; así como llevar un registro de aquellas operaciones inusuales que, luego del análisis respectivo, no fueron determinadas como sospechosas.
- d) Implementar las políticas y procedimientos para asegurar la adecuada gestión de riesgos de LA/FT.
- e) Verificar que el personal de la empresa cuente con el nivel de capacitación apropiado para los fines del sistema de prevención del LA/FT y la adecuada gestión de los riesgos de LA/FT.
- f) Asegurar que el sistema de prevención del LA/FT incluya la revisión de las listas señaladas en el Anexo N° 1.
- g) Proponer señales de alerta a ser incorporadas en el manual.
- h) Determinar y calificar las operaciones como sospechosas y, en su caso, comunicarlás a través de los ROS a la UIF-Perú, en representación de la empresa, llevando control de estas.
- i) Emitir informes trimestrales y semestrales sobre su gestión al presidente del directorio.
- j) Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos relacionados al sistema de prevención del LA/FT.
- k) Actuar como interlocutor de la empresa ante la Superintendencia, en los temas relacionados a su función.
- l) Atender los requerimientos de información o de información adicional solicitada por las autoridades competentes.
- m) Las demás que sean necesarias o establezca la Superintendencia para vigilar el funcionamiento y el nivel de cumplimiento del sistema de prevención del LA/FT.

Artículo 12°.- Programa anual de trabajo del oficial de cumplimiento

Para el cumplimiento de las responsabilidades y funciones señaladas en el artículo precedente, el oficial de cumplimiento debe elaborar un programa anual de trabajo, el cual debe ser puesto en consideración previa del directorio, y aprobado por este antes del 31 de diciembre de cada año. Dicho programa debe contener la metodología para la ejecución de cada una de las actividades contenidas en este, así como las fechas, roles y responsables de la ejecución de cada actividad.

Artículo 13°.- Dedicación exclusiva del oficial de cumplimiento

El oficial de cumplimiento realiza sus funciones de manera exclusiva cuando se trate de:

- a) Las empresas bancarias, con excepción de las señaladas en el inciso d) del numeral 10.2.1 del artículo 10° de la Ley;
- b) Las empresas de operaciones múltiples, distintas a las empresas bancarias, cuyo patrimonio efectivo a diciembre del año previo, haya sido equivalente al capital mínimo requerido a las empresas bancarias;
- c) Las empresas de seguros y/o reaseguros, cuyo patrimonio efectivo a diciembre del año previo, haya sido superior a cien millones de nuevos soles (S/. 100,000,000.00);
- d) Las empresas emisoras de tarjetas de crédito y/o débito, las empresas de transporte, custodia y administración de numerario; y, los almacenes generales de depósito, que tengan más de cien (100) trabajadores;
- e) Las empresas de transferencia de fondos cuyo promedio mensual de fondos transferidos en los últimos doce (12) meses sea igual o superior a las cuatro mil unidades impositivas tributarias (4000 UIT);
- f) Las empresas emisoras de dinero electrónico que tengan más de cien (100) trabajadores y/o cuyo promedio mensual de fondos emitidos en los últimos doce (12) meses sea igual o superior a las cuatro mil unidades impositivas tributarias (4000 UIT); y/o alcancen con sus operaciones de transferencia de fondos los niveles señalados en el literal anterior; y,
- g) Las administradoras privadas de fondos de pensiones.



Artículo 14°.- Dedicación no exclusiva del oficial de cumplimiento

Las empresas que no se encuentren dentro de los parámetros señalados en el artículo precedente no se encuentran obligadas a contar con un oficial de cumplimiento a dedicación exclusiva.

De forma excepcional, los sujetos obligados que se encuentran comprendidos en el artículo precedente pueden solicitar de manera sustentada, a la Superintendencia, la autorización para contar con un oficial de cumplimiento a dedicación no exclusiva, el cual debe cumplir con todos los requisitos del oficial de cumplimiento señalados en los artículos 7° y 8° del Reglamento.

Lo expuesto en los párrafos precedentes no limita que, si en uso de sus facultades de supervisión, la Superintendencia determina que el ejercicio práctico de las funciones del oficial de cumplimiento a dedicación no exclusiva no permite una adecuada gestión de los riesgos de LA/FT que enfrenta la empresa, pueda dejar sin efecto la autorización al sujeto obligado para contar con un oficial de cumplimiento a dedicación no exclusiva.

Artículo 15°.- Oficial de cumplimiento corporativo

15.1 Los integrantes de un grupo económico pueden designar a un oficial de cumplimiento corporativo, para lo cual deben contar con la autorización expresa de la UIF-Perú y, de ser el caso, de los titulares de los organismos supervisores de otros miembros del grupo económico, no supervisados por la Superintendencia.

El cargo de oficial de cumplimiento corporativo debe ser a dedicación exclusiva y tener primer nivel gerencial en uno de los conformantes del grupo económico que sea supervisado por la Superintendencia.

15.2 Para la autorización del cargo de oficial de cumplimiento corporativo, las empresas deben presentar una solicitud de autorización dirigida a la UIF-Perú, suscrita por cada uno de los representantes de los integrantes del grupo económico, adjuntando un informe técnico que sustente la viabilidad de contar con un oficial de cumplimiento corporativo. La solicitud debe estar acompañada de la siguiente información:

- a) Relación de integrantes del grupo económico bajo el control del oficial de cumplimiento corporativo, sean supervisados o no por la Superintendencia;
- b) Relación del personal a cargo del oficial de cumplimiento corporativo y de los coordinadores corporativos designados por cada integrante del grupo;
- c) Informe que sustente la forma en que se dará cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de prevención del LA/FT, para cada uno de los integrantes del grupo económico que se encontrarían en el ámbito de la función corporativa;
- d) Currículum vitae del oficial de cumplimiento corporativo;
- e) Declaración jurada del oficial de cumplimiento corporativo donde se precise que consta dentro de su documentación personal información suficiente sobre sus antecedentes personales, laborales, historial crediticio y patrimonial;
- f) Declaración jurada que indique que el nombramiento del oficial de cumplimiento corporativo cuenta con la aprobación del directorio de cada uno de los integrantes del grupo económico, sean o no supervisados por la Superintendencia;
- g) Declaración jurada que establezca que, de otorgarse la autorización, el oficial de cumplimiento corporativo contará con el personal suficiente para cumplir con sus obligaciones; y,
- h) En caso de que existan integrantes del grupo económico que se encuentren bajo la competencia de otros órganos de supervisión diferentes a la Superintendencia, se debe también acompañar a la mencionada solicitud copia de sus opiniones técnicas favorables para que las empresas bajo su competencia cuenten con el cargo de oficial de cumplimiento corporativo o el cargo de recepción de dichas solicitudes para acreditar que se encuentran en trámite.



La UIF-Perú resuelve la solicitud sobre la base de las opiniones técnicas que emitan las demás áreas competentes de la Superintendencia, así como, de los demás organismos de supervisión y su propia evaluación. El pronunciamiento de la UIF-Perú será comunicado a los organismos supervisores y a los integrantes del grupo económico.

15.3 La remoción del oficial de cumplimiento corporativo debe ser puesta en conocimiento de la Superintendencia. Deberá tomarse en consideración las disposiciones de designación, remoción y vacancia establecidas en el artículo 9° del Reglamento, adjuntando –adicionalmente- una declaración jurada sobre la inexistencia del cambio sustancial en el grupo económico. En caso de modificación en el grupo económico por incorporación de un nuevo integrante, deberá considerarse, adicionalmente, lo señalado en el numeral 15.4.

15.4 Los integrantes de un grupo económico autorizado para contar con un oficial de cumplimiento corporativo, que requieren incorporar al grupo económico un nuevo sujeto obligado, sea o no supervisado por la Superintendencia, deberán presentar una solicitud suscrita por cada uno de los representantes de los integrantes del grupo económico, debiendo seguir el procedimiento establecido en el numeral 15.2, adjuntando la información que sea materia de modificación respecto a la presentada al momento de nombrar al oficial de cumplimiento corporativo.

15.5 Si en uso de sus facultades de supervisión, se determina que el ejercicio práctico de las funciones del oficial de cumplimiento corporativo no permite una adecuada gestión de los riesgos de LA/FT en los integrantes del grupo económico para las cuales ha sido considerado como oficial de cumplimiento corporativo, puede recomendar a la UIF-Perú que se deje sin efecto la autorización concedida.

Artículo 16°.- Coordinador corporativo en materia de prevención del LA/FT

Los integrantes de un grupo económico que cuente con un oficial de cumplimiento corporativo deben designar un coordinador corporativo en cada integrante del grupo económico, el cual está encargado de coordinar directamente todos los temas relacionados a la prevención del LA/FT con el oficial de cumplimiento corporativo; sin perjuicio de que el oficial de cumplimiento corporativo mantiene la responsabilidad del sistema de prevención de LA/FT de cada una de las empresas integrantes del grupo económico.

La Superintendencia, dependiendo de las características de las empresas, puede solicitar que el cargo del coordinador corporativo sea ejercido a dedicación exclusiva.

Artículo 17°.- Comité de riesgos de LA/FT

Las empresas que constituyan un comité de riesgos de LA/FT, para brindar apoyo al oficial de cumplimiento en la adopción de políticas y procedimientos necesarios para el buen funcionamiento del sistema de prevención de LA/FT, deben contar con un reglamento del referido comité, aprobado por el directorio, el que contenga las disposiciones y procedimientos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Este comité es presidido por el oficial de cumplimiento y debe estar conformado por funcionarios del primer nivel gerencial, de acuerdo a las normas dictadas por la Superintendencia y que – en su mayoría-, realicen labores de gestión en áreas directamente relacionadas con el objeto social de la empresa.

En el caso de constituirse un comité de riesgos de LA/FT corporativo, este debe estar compuesto por un funcionario del primer nivel gerencial de cada integrante del grupo económico.



SUB CAPÍTULO II **NORMAS INTERNAS**

Artículo 18º.- Manual

Las políticas y procedimientos relacionados al sistema de prevención del LA/FT y la gestión de riesgos de LA/FT deben estar incluidos en el manual. El manual debe contener como mínimo la información señalada en el Anexo N° 2, y ser aprobado por el directorio.

El manual debe actualizarse en concordancia con la regulación nacional y estándares internacionales sobre la materia, y debe ser puesto en conocimiento de los directores, gerentes y trabajadores, en lo que corresponda. La empresa debe dejar constancia del conocimiento que han tomado los directores, gerentes y trabajadores sobre el manual y de su compromiso a cumplirlo en el ejercicio de sus funciones dentro de la empresa. Dicha constancia debe estar registrada en sus archivos.

Las empresas podrán establecer convenios con la finalidad de contar con un manual único a nivel gremial.

Artículo 19º.- Código de conducta

Los directores, gerentes y trabajadores deben comprometerse a poner en práctica un código de conducta, aprobado por el directorio, destinado a asegurar el adecuado funcionamiento del sistema de prevención del LA/FT.

El código de conducta debe contener, entre otros aspectos, los principios rectores, valores, políticas, procesos y controles que deben aplicarse para el adecuado desarrollo del sistema de prevención del LA/FT y la gestión de los riesgos de LA/FT. Con dicha finalidad, el código de conducta de las empresas debe resaltar el carácter obligatorio de los procedimientos que integran el sistema de prevención del LA/FT, de acuerdo con la normativa vigente sobre la materia. Asimismo, debe establecer que cualquier incumplimiento al sistema de prevención del LA/FT se considera falta muy grave, grave o leve, que será determinada previamente por las empresas según el tipo de falta de que se trate, con la aplicación de las sanciones que correspondan de acuerdo con las disposiciones y los procedimientos determinados por las empresas.

Las empresas deben dejar constancia del conocimiento que han tomado los directores, gerentes y trabajadores sobre el código de conducta y el compromiso a cumplirlo en el ejercicio de sus funciones dentro de las empresas. Asimismo, de ser el caso, las sanciones que se impongan y las constancias previamente señaladas, deben registrarse en los archivos de la empresa.



SUB CAPÍTULO III **TRATAMIENTO DEL GRUPO ECONÓMICO**

Artículo 20°.- Grupo económico

Los grupos económicos conformados por empresas que estén afectos a supervisión consolidada de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia, deben desarrollar políticas y procedimientos corporativos con relación al sistema de prevención del LA/FT, incluyendo:

- a) Políticas y procedimientos para intercambiar información dentro del grupo para propósitos de prevención del LA/FT.
- b) Criterios necesarios que deben adoptar los integrantes del grupo económico para asegurar elevados estándares a la hora de contratar a los empleados y designar a los directores y gerentes.
- c) Programas de capacitación en materia de prevención del LA/FT.

El tipo y alcance de las referidas políticas y procedimientos deben tomar en consideración los riesgos de LA/FT y ser consistentes con la complejidad de las operaciones y/o servicios que ofrecen, y el tamaño del grupo económico.

Artículo 21°.- Sucursales, subsidiarias y empresas en el exterior

Las empresas deben verificar que sus sucursales, subsidiarias y empresas en el exterior, pertenecientes a un grupo económico supervisado por la Superintendencia, cumplan con las medidas de prevención del LA/FT y la gestión de riesgos de LA/FT compatibles con las exigidas en el Perú y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI.

En caso de que la normativa local del país en que se encuentran constituidas impida el cumplir apropiadamente con las medidas de prevención del LA/FT definidas por la Superintendencia, las empresas tienen un plazo máximo de treinta (30) días desde la emisión de la norma en el país de constitución, para remitir un informe a la Superintendencia sobre las limitaciones presentadas; dicho informe debe contar con el sustento legal del impedimento de su aplicación.

En lo que corresponda, resulta aplicable lo dispuesto en la normativa emitida por la Superintendencia sobre la supervisión consolidada de los conglomerados financieros y mixtos.

CAPITULO III **ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS**

Artículo 22°.- Calificación de riesgos de LA/FT para clientes

Las empresas deben desarrollar criterios con relación a la calificación de riesgos de LA/FT de clientes, los cuales deben tomar en cuenta, entre otros aspectos, los atributos asociados al factor de riesgos "clientes", tales como nacionalidad, residencia, actividad económica; así como el volumen transaccional real y/o estimado, en concordancia con lo señalado en el artículo 4° del Reglamento. Esta calificación se debe producir tanto en la aceptación de nuevos clientes como actualizarse a lo largo de la relación con el cliente.

Estos criterios deben formalizarse a través de un sistema de calificación (scoring) de riesgos de LA/FT, al cual deben ser sometidos todos los clientes. La hoja de calificación de riesgos de LA/FT debe figurar en los expedientes de los clientes. El Anexo N° 3 establece los criterios mínimos a ser considerados en este sistema de calificación.

La empresa debe desarrollar un plan de adecuación referido a la aplicación del sistema de calificación (scoring) de riesgos de LA/FT para los clientes con los que hayan celebrado contratos para la prestación



de algún servicio o el suministro de cualquier producto financiero con anterioridad a la entrada en vigencia del Reglamento. Asimismo, la empresa debe establecer la periodicidad con la que se actualizará la hoja de calificación de riesgos de LA/FT de los clientes.

Tratándose de los clientes sujetos al régimen simplificado, la calificación de riesgos de LA/FT tendrá en cuenta únicamente las variables requeridas según el mencionado régimen.

Artículo 23°.- Lanzamiento de nuevos productos y/o servicios

Las empresas deben evaluar el nivel de exposición a los riesgos de LA/FT al que se encontrarían expuestos los nuevos productos y/o servicios que pretendan ofrecer las empresas. Esta evaluación debe tomar en cuenta, entre otros aspectos, el canal de distribución del producto y/o servicio, así como otros atributos del factor de riesgo “productos y/o servicios”. Esta evaluación también debe realizarse cuando las empresas decidan usar nuevas tecnologías asociadas a los productos y/o servicios ofrecidos.

Artículo 24°.- Incursión en nuevas zonas geográficas

Las empresas deben evaluar el nivel de exposición a los riesgos de LA/FT al que se encontrarían expuestas en caso de incursionar en nuevas zonas geográficas. Esta evaluación debe tener en consideración la evaluación del factor de riesgo “zona geográfica”.

Artículo 25°.- Indicadores clave de riesgo de LAFT

Los indicadores clave de riesgos de LA/FT constituyen la métrica que provee información acerca del nivel de exposición de la empresa a los riesgos de LA/FT en un momento dado.

Los indicadores clave de riesgo deben proveer información acerca del nivel de exposición de las empresas a los riesgos de LA/FT, de acuerdo a lo requerido por la Superintendencia. Para dicho propósito, las empresas, de acuerdo a la complejidad de sus operaciones, deben desarrollar internamente indicadores clave de riesgo adicionales a los requeridos por la Superintendencia.

CAPÍTULO IV

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE LA/FT

Artículo 26°.- Identificación y evaluación de riesgos de LA/FT

Las empresas deben desarrollar e implementar procedimientos de identificación de la exposición a los riesgos de LA/FT, tomando en cuenta los factores de riesgos de LA/FT, así como el mercado en el cual la empresa realiza sus actividades.

Las empresas deben evaluar, por lo menos anualmente, los riesgos de LA/FT a los que se encuentran expuestas. El informe y la metodología empleada para realizar dicha evaluación deben estar a disposición de la Superintendencia.



CAPÍTULO V
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS DE LA/FT

SUB CAPÍTULO I
CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

Artículo 27°.- Determinación de clientes

El cliente es la persona natural o jurídica con la cual las empresas contratan la prestación de algún servicio o el suministro de cualquier producto financiero.

Para la determinación de los clientes, debe tomarse en consideración lo siguiente:

- a) Tratándose de las empresas de seguros, se considera como clientes, según corresponda, al contratante, al asegurado y al beneficiario del seguro, debiendo identificarse a estas personas conforme al Reglamento. No obstante, las disposiciones sobre conocimiento del cliente se pueden aplicar al beneficiario del seguro después de haberse establecido la relación con el contratante del seguro y/o asegurado, pero antes de efectuar el pago de la indemnización que corresponda o de que el beneficiario pueda ejercer los derechos derivados del contrato de seguro.
- b) En el caso de las administradoras privadas de fondos de pensiones, son clientes los afiliados al sistema privado de administración de fondos de pensiones.
- c) Para el caso de las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a operar con recursos del público, se considerarán como clientes a todos los socios que han cumplido con los requisitos exigidos, según las propias normas internas de cada cooperativa a la cual se asocian, y con quienes en virtud de esta condición mantienen o establecen relaciones para la prestación de servicios o suministro de productos propios de las cooperativas, conforme a sus normas aplicables y a sus operaciones autorizadas.

Las disposiciones en materia de debida diligencia basada en riesgos son aplicables a los clientes de las empresas, sean estos habituales u ocasionales, nacionales o extranjeros.

Artículo 28°.- Conocimiento del beneficiario final del cliente

Para el sistema de prevención del LA/FT, el beneficiario final es la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción y/o que posee o ejerce el control efectivo final sobre un cliente a favor de la cual se realiza una transacción u operación. Incluye también a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica o ente jurídico.

Constituye deber permanente de las empresas identificar a los beneficiarios finales de todos los servicios o productos que suministren y tomar las medidas razonables para verificar su identidad, de modo que estén convencidas de que se conoce quién es el beneficiario final.

Para el caso de personas jurídicas y entes jurídicos, en caso no pueda determinarse quien detenta el control efectivo final, por participación mayoritaria en caso de personas jurídicas, se considera a quien ejerce el control por otros medios; y solo cuando en dichos casos no se identifique a una persona natural, se considerará a la persona natural que desempeñe funciones de dirección y/o gestión.

En el caso de fideicomisos, se debe determinar la identidad de los participantes en el fideicomiso (fideicomitente y los fideicomisarios o beneficiarios), así como de cualquier otra persona natural que de cualquier manera ejerza el control efectivo y definitivo sobre el fideicomiso.

Cuando el beneficiario de un seguro de vida sea una persona jurídica o estructura jurídica, se deben adoptar las medidas razonables para identificar y verificar la identidad del beneficiario final del beneficiario



en el momento del pago, y de detectarse que representa un riesgo mayor, debe incluirse en el régimen reforzado.

La exigencia contemplada en el presente artículo resulta aplicable sin importar el régimen de debida diligencia al que se encuentre sometido el cliente.

Artículo 29°.- Etapas de la debida diligencia en el conocimiento del cliente

29.1 El proceso de debida diligencia en el conocimiento del cliente consta de las siguientes etapas: i) identificación, ii) verificación, y iii) monitoreo continuo; la realización parcial o total de cada una de las etapas se encuentra en función a lo establecido en el Reglamento:

- a) Etapa de identificación.- Consiste en desarrollar e implementar procedimientos para obtener la información que permita determinar la identidad de un cliente o beneficiario final.
- b) Etapa de verificación.- Implica la aplicación de procedimientos de verificación al inicio de la relación contractual con respecto a la información proporcionada por los clientes y, de ser el caso, de su beneficiario final, con el objetivo de asegurarse que han sido debidamente identificados, debiendo dejar constancia de ello en su documentación personal. Cuando resulte esencial iniciar la relación comercial antes de la verificación para no interrumpir el curso normal de esta, las empresas pueden verificar la identidad del cliente luego o durante el curso de la relación contractual. Las empresas deben adoptar procedimientos de gestión de riesgos de LA/FT para determinar las condiciones bajo las cuales un cliente podría utilizar los servicios y/o productos de la empresa con anterioridad a la verificación.
- c) Etapa de monitoreo.- Tiene por propósito el asegurar que las operaciones que realizan los clientes sean compatibles con lo establecido en su perfil. Asimismo, el monitoreo permite reforzar y reafirmar el conocimiento que poseen las empresas sobre sus clientes, así como obtener mayor información cuando se tengan dudas sobre la veracidad o actualidad de los datos proporcionados por los clientes. Las empresas deben determinar su frecuencia, considerando los riesgos de LA/FT que enfrentan.

29.2 Cuando la empresa no se encuentre en la capacidad de cumplir con las medidas de debida diligencia en el conocimiento del cliente debe proceder de la siguiente manera: i) no iniciar relaciones comerciales, no efectuar la transacción y/o terminar la relación comercial iniciada; y ii) evaluar la posibilidad de efectuar un reporte de operaciones sospechosas (ROS) con relación al cliente.

29.3 En caso la empresa tenga sospechas de actividades de LA/FT y considere que el efectuar acciones de debida diligencia alertaría al cliente, debe reportar la operación sospechosa a la UIF-Perú sin efectuar dichas acciones. Estos casos deben encontrarse adecuadamente fundamentados y documentados.

Artículo 30°.- Régimen general de debida diligencia en el conocimiento del cliente

30.1 La información mínima que las empresas deben obtener de sus clientes personas naturales, cuando sea aplicable, es la siguiente:

- a) Nombres y apellidos completos.
- b) Tipo y número del documento de identidad.
- c) Nacionalidad y residencia.
- d) Domicilio, número de teléfono y correo electrónico, de ser el caso.
- e) Propósito de la relación a establecerse con la empresa, siempre que este no se desprenda directamente del objeto del contrato.
- f) Ocupación, oficio o profesión y nombre del centro de labores, de ser el caso.
- g) Si ha sido considerado como PEP en los últimos cinco (5) años, en el Perú o en el extranjero, indicando el nombre de la institución, organismo público u organización internacional.



- h) Hoja de calificación de riesgos de LA/FT del cliente, tomando en cuenta los aspectos señalados en el Artículo 22° y el Anexo N° 3 del Reglamento.

30.2 La información mínima que las empresas deben obtener de sus clientes personas jurídicas, así como de entes jurídicos, cuando sea aplicable, es la siguiente:

- a) Denominación o razón social.
- b) Registro Único de Contribuyentes (RUC), de ser el caso.
- c) Objeto social, actividad económica principal o finalidad de constitución de la persona jurídica o ente jurídico, según corresponda.
- d) Identificación de los accionistas, socios o asociados que tengan directa o indirectamente más del 25% del capital social, aporte o participación de la persona jurídica y/o ente jurídico, considerando la información requerida para las personas naturales, identificando aquellos que sean PEP, cuando corresponda.
- e) Propósito de la relación a establecerse con la empresa, siempre que este no se desprenda directamente del objeto del contrato.
- f) Identificación de los representantes legales considerando la información requerida para las personas naturales, así como el otorgamiento de los poderes correspondientes, en lo que resulte aplicable.
- g) Personas jurídicas vinculadas al cliente y/o a su grupo económico, en caso corresponda.
- h) Dirección y teléfono de la oficina o local principal, donde desarrollan las actividades propias al giro de su negocio.
- i) Hoja de calificación de riesgos de LA/FT del cliente, tomando en cuenta los aspectos señalados en el Artículo 22° y el Anexo N° 3 del Reglamento.

30.3. Para realizar la verificación de la información, las empresas deben tomar en consideración los riesgos de LA/FT de los productos y/o servicios y las características de la relación esperada con el cliente. Para ello, deben desarrollar estudios que determinen los criterios aplicables, compatibles con la adecuada verificación de la información mínima de identificación requerida para dichas operaciones.

30.4 Las empresas deben dejar constancia documental de las verificaciones efectuadas, las cuales pueden constar en visitas a domicilios u oficinas o entrevistas personales y/u otros procedimientos que permitan a las empresas asegurarse de que sus clientes y, de ser el caso, beneficiarios finales, han sido debidamente identificados, en la que se indique el lugar, fecha y hora de estos y sus resultados, según corresponda al tipo de verificación efectuada. La referida constancia debe incorporarse en la documentación personal de cada cliente.

Artículo 31°.- Régimen simplificado de debida diligencia en el conocimiento de clientes

La aplicación de este régimen permite a la empresa la reducción de algunos requisitos de información mínima aplicable a la etapa de identificación de clientes, cuando el nivel de riesgos de LA/FT así lo amerite, de acuerdo a lo autorizado o al tratamiento establecido por la Superintendencia en su normativa, sobre determinados productos y/o servicios que son incluidos en el régimen simplificado.

La información mínima a ser obtenida bajo este régimen es: nombre completo, tipo y número de documento de identidad y domicilio. Para su correspondiente verificación, es exigible el documento nacional de identidad para el caso de peruanos, y el carné de extranjería, pasaporte o documento legalmente establecido para la identificación de extranjeros, según corresponda.

Para aplicar el régimen simplificado a un determinado producto, la empresa debe solicitar autorización en forma previa a la Superintendencia, para lo cual debe presentar:

- a) Información acerca de las características del producto y/o servicio; incluyendo las características comerciales de dicho producto.



- b) Información relativa a los factores de riesgos de LA/FT relacionados al producto y/o servicio.
- c) Información relativa al sistema de detección de LA/FT relacionado al producto y/o servicio.

Las empresas deben efectuar actualizaciones cuando las condiciones o características del producto y/o varíen. La Superintendencia puede dejar sin efecto dichas autorizaciones cuando determine que el producto y/o servicio no amerita encontrarse bajo el régimen simplificado.

Si un cliente contrata un producto y/o servicio considerado en este régimen, pero presente alguna de las características indicadas en el artículo siguiente, para el referido producto y/o servicio debe primar su consideración como cliente sujeto al régimen simplificado. Lo expuesto no resulta aplicable cuando la empresa sospecha que el cliente se encuentra relacionado con actividades de LA/FT, o cuando se identifique, como resultado del análisis realizado por la empresa, la existencia de un mayor riesgo, en cuyo caso deberá aplicar un régimen reforzado de debida diligencia.

Artículo 32º.- Régimen reforzado de debida diligencia en el conocimiento del cliente

La aplicación de este régimen implica para las empresas el desarrollo e implementación de procedimientos de debida diligencia reforzados en el conocimiento de sus clientes, para lo cual deben identificar y registrar bajo este régimen a los clientes que en el transcurso de la relación comercial, muestren un patrón que no corresponde a su perfil de riesgos de LA/FT, así como a aquellos clientes que podrían encontrarse altamente afectados por los riesgos de LA/FT.

Se debe aplicar este régimen obligatoriamente a los siguientes clientes:

- a) Nacionales o extranjeros, no residentes;
- b) Personas jurídicas no domiciliadas.
- c) Fideicomisos;
- d) Organizaciones sin fines de lucro;
- e) Personas expuestas políticamente (PEP) o que administren recursos públicos. Las empresas también deben reforzar sus procedimientos de conocimiento del cliente cuando uno de sus clientes se convierta en un PEP o que administre recursos públicos, según sea el caso, luego de haber iniciado relaciones comerciales con la empresa;
- f) Identificados como parientes de PEP hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad y del cónyuge o conviviente;
- g) Personas jurídicas o entes jurídicos en las que un PEP tenga el 25% o más del capital social, aporte o participación;
- h) Que tengan la calidad de socios, accionistas o asociados y administradores de personas jurídicas donde un PEP tenga el 25% o más del capital social, aporte o participación;
- i) Personas naturales o jurídicas, o entes jurídicos que reciben transferencias desde países considerados como no cooperantes por el Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI, con riesgo relacionado al LA/FT, con escasa supervisión bancaria, o países sujetos a sanciones OFAC;
- j) En tanto sea comunicado, sujetos obligados que -como consecuencia de un pronunciamiento firme- hayan sido sancionados por una autoridad competente, por la comisión de una infracción leve, grave o muy grave, por presentar deficiencias en el sistema de prevención del LA/FT en los últimos 2, 4 o 6 años, según la gravedad de la infracción, respectivamente.
- k) Sujetos obligados que no hayan designado a su oficial de cumplimiento conforme a lo exigido por las disposiciones vigentes en materia de prevención del LA/FT. El presente supuesto resultará aplicable de acuerdo con las disposiciones que comunique la UIF-Perú mediante oficio múltiple.
- l) Personas naturales, jurídicas o entes jurídicos respecto de los cuales se tenga conocimiento que están siendo empleados como canales o siendo investigados por el delito de lavado de activos, delitos precedentes y/o financiamiento del terrorismo por las autoridades competentes;



- m) Vinculados con personas naturales o jurídicas sujetas a investigación o procesos judiciales relacionados con el lavado de activos, delitos precedentes y/o el financiamiento del terrorismo.
- n) Dedicados a servicios de corresponsalía con empresas extranjeras constituidas en países de baja o nula imposición tributaria o que no cuentan con regulación o supervisión bancaria.
- o) Aquellos otros supuestos que identifiquen las empresas.

Las empresas deben determinar si los clientes personas naturales que mantengan cuentas de depósito superiores a US\$ 500,000.00, por sus condiciones particulares, ameritan ser incluidos en el presente régimen.

La empresa debe implementar las siguientes medidas de debida diligencia para todos los clientes registrados en este régimen:

- a) Tratándose de PEP, se debe requerir el nombre de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad y del cónyuge o conviviente, así como la relación de personas jurídicas o entes jurídicos donde mantenga una participación igual o superior al 25% de su capital social, aporte o participación.
- b) Incrementar la frecuencia en la revisión de la actividad transaccional del cliente.
- c) Incrementar la frecuencia en la actualización de la información del cliente; cuando se trate de personas jurídicas o entes jurídicos, una actualización anual de sus accionistas, socios o asociados que tengan directa o indirectamente más del 25% de su capital social, aporte o participación, de ser el caso.
- d) Realizar indagaciones y aplicar medidas adicionales de identificación y verificación, como: obtener información sobre los principales proveedores y clientes, recolectar información de fuentes públicas o abiertas, realización de visitas al domicilio.
- e) La decisión de aceptación y/o de mantenimiento de la relación con el cliente estará a cargo del nivel gerencial más alto de la empresa, quien a su vez puede delegar esta función a otro puesto gerencial dentro de la organización o a un comité establecido al efecto, conservando la responsabilidad de la aceptación y/o mantenimiento o no del cliente.

SUB CAPÍTULO II

CONOCIMIENTO DEL MERCADO

Artículo 33°.- Aspectos generales del conocimiento del mercado

El conocimiento del mercado es un complemento del conocimiento del cliente que permite a las empresas estimar los rangos dentro de los cuales se ubicarían las operaciones usuales que realizan sus clientes, así como conocer las características de los segmentos en los cuales operan, a partir de la exposición a los riesgos de LA/FT.

Para cumplir con dicho propósito las empresas deben determinar un conjunto de variables que les permitan garantizar el conocimiento de los mercados en los que operan, desarrollar criterios y procedimientos con la finalidad de estimar los rangos dentro de los cuales las operaciones de sus clientes serían consideradas como normales.

Artículo 34°.- Formación de segmentos y perfilamiento de los clientes

La segmentación consiste en establecer grupos de mercado, los cuales guardan una homogeneidad interna, pero una heterogeneidad entre dichos grupos, de acuerdo con una o varias variables.

En ese sentido, las empresas deben segmentar el mercado, clasificar y elaborar perfiles de sus clientes en cada segmento de acuerdo al comportamiento y uso de los diferentes productos y/o servicios. Las variables utilizadas para la segmentación deberán permitir estimar las características de las operaciones



que realizarán los clientes. La información relativa a los segmentos determinados y las variables consideradas para el conocimiento del mercado debe encontrarse a disposición de la Superintendencia.

Artículo 35º.- Análisis de escenarios

El análisis de escenarios permite a las empresas identificar aquellas situaciones de LA/FT a las que son vulnerables y que comúnmente no experimentarían en situaciones normales. Las empresas deben definir posibles escenarios de acuerdo con la naturaleza, tamaño y complejidad de sus operaciones, considerando para ello los supuestos y la magnitud por las cuales la empresa podría ser utilizada para el LA/FT considerando su perfil de riesgos de LA/FT.

Los resultados obtenidos deben ser considerados para establecer y revisar las políticas y procedimientos para la gestión de los riesgos de LA/FT.

SUB CAPÍTULO III
CONOCIMIENTO DE DIRECTORES, GERENTES, TRABAJADORES, PROVEEDORES,
CONTRAPARTES Y SUBCONTRATACIÓN

Artículo 36º.- Conocimiento de directores, gerentes y trabajadores

Las empresas deben implementar una política de debida diligencia en el conocimiento de sus directores, gerentes y trabajadores que forme parte del programa de reclutamiento y selección del personal de nuevo ingreso, permanentes y temporales, que asegure un alto nivel de integridad del personal.

El propósito de la debida diligencia en el conocimiento de los directores, gerentes y trabajadores es que las empresas estén en la capacidad de identificar patrones de conducta fuera de sus perfiles. Para ello, las empresas deben requerir y verificar la siguiente información:

- a) Nombres y apellidos completos.
- b) Copia del documento nacional de identidad.
- c) Estado civil, incluyendo el nombre del cónyuge en caso declare ser casado. En caso declare tener conviviente, consignará sus nombres y apellidos.
- d) Dirección domiciliaria y número telefónico de su domicilio habitual.
- e) Certificado de antecedentes policiales y penales.
- f) Declaración jurada patrimonial y de otros ingresos, distintos a los percibidos por la relación laboral con la empresa.
- g) Ocupación dentro de la empresa.
- h) Nivel de endeudamiento en el sistema financiero.

Esta información debe ser parte de la documentación personal de cada uno de los directores, gerentes y trabajadores de las empresas.

Las empresas deben realizar las siguientes acciones:

- a) Al momento de la selección o contratación y con posterioridad a la vinculación entre las partes, verificar las listas señaladas en el Anexo N° 1, a fin de determinar si se encuentra o no comprendido en ellas.
- b) Actualizar la información relacionada a la declaración jurada patrimonial de forma periódica; el plazo de actualización no puede ser mayor a los dos (2) años.
- c) Elaborar señales de alerta, así como los procedimientos que se deben seguir una vez que estas se activen, considerando –entre otros- las disposiciones emitidas por la Superintendencia sobre la idoneidad de accionistas, directores y principales funcionarios.



Artículo 37º.- Conocimiento de proveedores

Las empresas deben desarrollar procedimientos de debida diligencia durante la selección de los proveedores, para lo cual deben requerir y verificar la siguiente información como mínimo:

- a) Nombres y apellidos completos o denominación o razón social, en caso se trate de una persona jurídica.
- b) Registro Único de Contribuyentes (RUC), de ser el caso.
- c) Dirección de la sede principal; y de ser el caso la sucursal o franquicia en el Perú.
- d) Años de experiencia en el mercado.
- e) Rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios.
- f) Nombres y apellidos y documento de identidad de sus principales accionistas o socios y representante legal.
- g) El propósito específico de la relación comercial.
- h) Antecedentes penales del proveedor, en caso se trate de persona natural.

Las empresas deben:

- a) Al momento de selección de los proveedores y con posterioridad a la vinculación entre las partes, deben verificar las listas señaladas en el Anexo N° 1, a fin de determinar si se encuentra o no comprendido en ellas.
- b) Actualizar la información de forma periódica; el plazo de actualización no puede ser mayor a los dos (2) años.
- c) Evaluar los casos en los que es conveniente incluir en los contratos con los proveedores la obligación de cumplir con las normas de prevención de LA/FT teniendo en consideración el sector donde desarrollen sus actividades económicas.
- d) Elaborar señales de alerta relacionadas a los proveedores, así como los procedimientos que se deben seguir una vez que estas se activen.

Artículo 38º.- Conocimiento de otras contrapartes

Se considera como otras contrapartes a las personas naturales o jurídicas con las cuales la empresa mantiene vínculos contractuales y que no se encuentran incorporados en las definiciones de clientes o proveedores. Las empresas deberán desarrollar procedimientos de debida diligencia para su conocimiento, los que deberán ser similares a aquellos establecidos para el caso de sus proveedores.

Artículo 39º.- Utilización y responsabilidad de intermediarios

Las empresas pueden utilizar intermediarios para dar cumplimiento a los servicios relacionados a la identificación y/o verificación de información de clientes, directores, gerentes, trabajadores o proveedores, para introducir y/o atraer nuevos negocios o para desarrollar actividades comerciales propias de la empresa, en la medida que ello se encuentre permitido, sujetándose a las normas generales de subcontratación definidas en la regulación vigente. Dichos intermediarios o terceros deben cumplir con la normativa de debida diligencia aplicable para las empresas en la Ley, el Reglamento de la Ley, el Reglamento o cualquier otra normativa que se emita al respecto, las cuales no se eximen de la responsabilidad de su cumplimiento por el hecho que dicha obligación sea realizada por un intermediario.

En estos casos, las empresas deben adoptar las medidas adecuadas para obtener de manera oportuna la información, así como una constancia de que el intermediario ha tomado medidas necesarias para cumplir con la debida diligencia de los clientes, directores, gerentes, trabajadores o proveedores. Las empresas que dependan de un intermediario para los servicios de identificación y/o verificación deben adoptar las medidas adecuadas para que puedan obtener de forma inmediata la información necesaria antes mencionada.

La empresa mantiene la responsabilidad del proceso de debida diligencia en el conocimiento de los clientes, directores, gerentes, trabajadores o proveedores, aun cuando esta haya sido encargada a un



intermediario, vinculado o no, debiendo supervisar el cumplimiento de lo dispuesto por la normativa vigente.

SUB CAPÍTULO IV CAPACITACIÓN

Artículo 40°.- Programa de capacitación

Las empresas deben elaborar un programa de capacitación anual que es aprobado por el directorio, que toma en consideración el perfil de los directores, gerentes y trabajadores, su formación progresiva y los riesgos de LA/FT a los que podrían encontrarse expuesto. Este programa tiene por finalidad instruir a los directores, gerentes y trabajadores sobre las normas vigentes, así como respecto de las políticas, normas y procedimientos establecidos por las empresas.

Los programas de capacitación deben ser revisados y actualizados por el oficial de cumplimiento, con la finalidad de evaluar su efectividad y adoptar las mejoras que se consideren pertinentes. Asimismo, el oficial de cumplimiento es responsable de comunicar a todos los directores, gerentes y trabajadores de la empresa los cambios en la normativa del sistema de prevención del LA/FT, ya sea esta interna o externa.

Artículo 41°.- De las capacitaciones

Los sujetos obligados deben mantener información, actualizada anualmente, sobre el nivel de capacitación recibido por los directores, gerentes y trabajadores, oficial de cumplimiento y el personal a su cargo, así como los coordinadores corporativos en materia de prevención del LA/FT, de acuerdo a su especialidad y funciones que desempeñan.

Los nuevos directores, gerentes y trabajadores que ingresen a las empresas deben recibir una capacitación sobre los alcances del sistema de prevención del LA/FT de la empresa, de acuerdo con las funciones que les correspondan, a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de ingreso; una constancia de dicha capacitación y las evaluaciones relacionadas deben encontrarse en su documentación personal.

Artículo 42°.- Requerimientos mínimos de capacitación

Se debe capacitar, de acuerdo a sus funciones, a los directores, gerentes y trabajadores como mínimo sobre lo siguiente:

- a) Definición de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- b) Políticas de la empresa sobre el modelo de prevención y gestión de los riesgos de LA/FT.
- c) Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesta la empresa
- d) Normativa vigente.
- e) Tipologías de LA/FT, así como las detectadas en la empresa o en otras empresas o en otros sujetos obligados.
- f) Normas internas de la empresa.
- g) Señales de alertas para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
- h) Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales.
- i) Responsabilidad de cada director, gerente y empleado, según corresponda, respecto de esta materia.
- j) Otros aspectos que consideren relevantes.

La Superintendencia puede establecer los aspectos que la capacitación debe cumplir de acuerdo a las funciones de las personas que requieren la capacitación.



SUB CAPÍTULO V
RELACIONES DE CORRESPONSALIA Y OPERACIONES CON BANCOS PANTALLA

Artículo 43°.- Relaciones de corresponsalia

Conforme al artículo 14° de la Ley, las empresas de operaciones múltiples y de servicios complementarios y conexos, así como las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a operar con recursos del público, según corresponda, deben contar con políticas y procedimientos para la prevención de LA/FT en los servicios de corresponsalia con personas jurídicas nacionales o extranjeras.

Los contratos de corresponsalia deben definir claramente las obligaciones y responsabilidades de cada empresa participante con relación a la prevención de LA/FT y encontrarse suscritos por el nivel gerencial más alto de las empresas.

Cuando una relación de corresponsalia incluya el mantenimiento de cuentas de transferencia de fondos en otras plazas, las empresas deben tener constancia de que: i) su cliente (la institución financiera representada) ha cumplido con todas las obligaciones de debida diligencia respecto de sus clientes que tengan acceso directo a las cuentas de la institución financiera corresponsal; y, ii) por pedido, la institución financiera representada está en condiciones de suministrarle datos de identificación de los clientes.

Artículo 44°.- Conocimiento de corresponsales

Las empresas deben establecer e implementar procedimientos de debida diligencia y conocimiento respecto a las entidades con las que se pretende establecer o se haya establecido servicios de corresponsalia; por lo que deben evaluar el sistema de prevención de LA/FT desarrollado por estas últimas, con énfasis, en el caso de empresas ubicadas en países con regulaciones estrictas respecto del secreto bancario o países de baja o nula imposición. Las evaluaciones y demás conocimiento que se efectúe sobre las entidades con las que se han establecido servicios de corresponsalia deben mantenerse en un expediente, que debe estar a disposición de la Superintendencia. Este artículo también es aplicable en el caso de empresas de transferencias de fondos.

Artículo 45°.- Régimen reforzado en relaciones de corresponsalia

En el caso de que la entidad con la que se mantiene relaciones de corresponsalia haya sido investigada y/o sancionada por deficiencias en su sistema de prevención de LA/FT, o se encuentre autorizada en un país no cooperante, las empresas deben aplicar medidas reforzadas de conocimiento y debida diligencia, las cuales deben constar en el expediente de la institución corresponsal y estar a disposición de la Superintendencia. Este artículo también es aplicable en el caso de empresas de transferencias de fondos.

Artículo 46°.- Operaciones con bancos pantalla

Se considera banco pantalla a la empresa del sistema financiero constituida y con autorización en un país en el que no tiene presencia física y que no es miembro de un grupo económico sujeto a supervisión consolidada efectiva. Por presencia física se entiende a las funciones directivas y administrativas ubicadas dentro de un país. La existencia de un representante local o de personal de bajo nivel no constituye presencia física.

Las empresas no pueden iniciar o continuar relaciones con bancos pantalla; asimismo, deben obtener constancia de que las empresas extranjeras con las cuales mantienen relaciones no permiten el uso de sus cuentas por parte de bancos pantalla.



SUB CAPÍTULO VI **TRANSFERENCIA DE FONDOS**

Artículo 47°.- Disposiciones sobre transferencias de fondos

Las empresas que operen con transferencias de fondos, que hayan sido ordenadas por o en beneficio de sus clientes deben registrar, información exacta y completa sobre sus clientes; nombre completo, denominación o razón social, domicilio, número de teléfono, número de cuentas involucradas, de no ser este último el caso, un número de referencia único. Esta información debe conservarse junto con la transferencia o el mensaje relacionado a través de la cadena de pago y en concordancia con lo señalado en el artículo 48°.

En caso las empresas participen o realicen operaciones de transferencias de fondos que hayan sido ordenadas o en beneficio de clientes de otras empresas nacionales deben consignar como mínimo el tipo y número documento de identidad y los nombres y apellidos completos de estos.

Asimismo, en caso las empresas participen o realicen operaciones de transferencias de fondos que hayan sido ordenadas o en beneficio de clientes de empresas del exterior deben consignar como mínimo los nombres y apellidos completos de estos.

En caso de transferencias por importes iguales o superiores a mil dólares americanos (US\$ 1,000.00), su equivalente en moneda nacional u otras monedas, así como tratándose de varias operaciones vinculadas y que juntas excedan el monto antes señalado durante un mes calendario, las empresas ordenantes deben verificar la información de identificación del ordenante y del beneficiario, de ser el caso. La empresa debe solicitar por lo menos, la presentación del documento de identidad del ordenante en el caso de que se realicen operaciones por montos inferiores a los mil dólares americanos (US\$ 1,000.00) o su equivalente en moneda nacional u otras monedas.

En los casos en los que se realicen transferencias de fondos a través de empresas que solo intervengan como corresponsales o intermediarios en la operación y en las cuales ni el ordenante y/o beneficiario sean clientes, las empresas deberán como mínimo identificar a estos con nombres y apellidos completos y el tipo y número de documento de identidad.

Las empresas son responsables del cumplimiento de la regulación vigente sobre LA/FT, por parte de los agentes que utilicen para realizar transferencias de fondos, debiendo monitorear su debido cumplimiento.

Los requisitos señalados en el presente artículo son aplicables tanto a transferencias nacionales como internacionales.

CAPÍTULO VI **ACTIVIDADES DE CONTROL**

Artículo 48°.- Sistemas de información

Las empresas deben desarrollar e implementar sistemas de información que permitan la gestión de los riesgos de LA/FT en la empresa, los cuales comprenden desde los canales de comunicación entre el oficial de cumplimiento y el directorio, gerencia y demás trabajadores de las empresas, hasta las herramientas informáticas utilizadas en la gestión de los riesgos de LA/FT.



CAPÍTULO VII
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
SUB CAPÍTULO I
REGISTRO DE OPERACIONES

Artículo 49°.- Información contenida

Adicionalmente a las operaciones a que se refiere el artículo 9.2 de la Ley, las empresas, según les sea aplicable, deben crear un registro que contenga las siguientes operaciones que se realicen o se hayan intentado realizar, por importes iguales o superiores a los descritos en el presente artículo:

- a) Retiro de fondos.
- b) Retiro de aportes o depósitos, en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a operar con recursos del público.
- c) Desembolso de créditos.
- d) Cobros de cheques.
- e) Compra de cheques certificados o cheques de gerencia.
- f) Pago o devolución de primas establecidas en las pólizas de seguro, independientemente de su forma de pago.
- g) Pago de beneficios, siniestros, rescate o cualquier desembolso que efectúe la empresa de seguros al asegurado o beneficiario como consecuencia de la ejecución del contrato de seguro.
- h) Pago de aportes obligatorios al sistema privado de pensiones.
- i) Pago de aportes voluntarios con o sin fin previsional al sistema privado de pensiones.
- j) Transferencias de aportes previsionales al exterior.
- k) Pólizas de seguro intermediadas y/o emitidas.
- l) Valor de la garantía de piedras y/o metales preciosos y/o minerales en caso de los créditos pignoratícios
- m) Operaciones realizadas con dinero electrónico.

Sin perjuicio de ello, la Superintendencia puede, por resolución:

- a) Ampliar, reducir y/o modificar la relación de conceptos que deban ser materia de anotación en el registro de operaciones, así como el contenido del mismo en relación con cada operación;
- b) Modificar el plazo, modo y forma como deben llevarse y conservarse el registro de operaciones; y,
- c) Establecer cualquier otro asunto que tenga relación con el registro de operaciones.

Las empresas deben anotar en el registro de operaciones las operaciones antes señaladas que se realicen por importes iguales o superiores a:

- a) Diez mil dólares americanos (US\$ 10,000.00), su equivalente en moneda nacional u otras monedas, de ser el caso.
- b) Tratándose de transferencia de fondos, la obligación comprende las operaciones a partir de dos mil quinientos dólares americanos (US\$ 2,500.00), su equivalente en moneda nacional u otras monedas, de ser el caso.
- c) Para el caso de las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público la obligación será para las operaciones a partir de cinco mil dólares americanos (US\$ 5,000.00) o su equivalente en moneda nacional u otras monedas, de ser el caso.
- d) Para el caso de pólizas de seguros: i) en seguros de vida aquellas cuya prima anual sea igual o superior a mil dólares americanos (US\$1,000.00) o su equivalente en moneda nacional u otras monedas, de ser el caso, o si la prima única no supera los dos mil quinientos dólares americanos (US\$ 2500.00) o su equivalente en moneda nacional u otras monedas, de ser el caso y ii) en seguros de ramos generales aquellas cuya prima anual sea igual o superior a quince mil dólares



americanos (US\$ 15,000.00), su equivalente en moneda nacional u otras monedas, de ser el caso.

- e) Para el caso de créditos con garantía de piedras y/o metales preciosos y/o minerales, se incluyen aquellos préstamos cuyos montos sean igual o superior a dos mil quinientos dólares americanos (US\$ 2,500.00).

Asimismo, se anotan en el registro de operaciones las operaciones múltiples efectuadas en una o varias de las oficinas, establecimientos o cualquier tipo de dispositivo físico o electrónico mediante los cuales se pueden efectuar operaciones durante un mes calendario, por o en beneficio de la misma persona, que en su conjunto iguallen o superen cincuenta mil dólares americanos (US\$ 50,000.00), su equivalente en moneda nacional u otras monedas, de ser el caso; o diez mil dólares americanos (US\$ 10,000.00), su equivalente en moneda nacional u otras monedas, de ser el caso, cuando se trate de transferencia de fondos; o veinte mil dólares americanos (US\$ 20,000.00), su equivalente en moneda nacional u otras monedas, de ser el caso, cuando se trate de cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público; en cuyos casos se considerarán como una sola operación.

El tipo de cambio aplicable para fijar el equivalente en moneda nacional u otras monedas, de ser el caso, es el obtenido de promediar los tipos de cambio de venta diarios correspondientes al mes anterior a la operación, publicados por la Superintendencia.

El registro de operaciones se realiza mediante sistemas informáticos que contengan la información mínima señalada en los artículos 9° y numeral 9.3 de la Ley, el artículo 7° del Reglamento de la Ley y el Reglamento.

Respecto de las personas naturales y/o jurídicas que intervienen en la operación, se debe anotar en el registro de operaciones la identificación de la persona que físicamente realiza la operación, así como de la persona en nombre de quien se realiza la operación y del beneficiario o destinatario de la misma, si lo hubiere. Las empresas alcanzan a la Superintendencia el registro de operaciones mediante el medio electrónico que esta establezca. Las operaciones realizadas por cuenta propia entre las empresas no requieren anotación en el registro de operaciones.

Artículo 50°.- Declaración Jurada

En caso se efectúe la anotación de una operación en efectivo en el registro de operaciones, la empresa debe solicitar una declaración jurada del cliente en la que se detalle el origen de los fondos utilizados en la operación materia de registro.

SUB CAPÍTULO II INFORMES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Artículo 51°.- Informes trimestrales

El oficial de cumplimiento debe presentar al presidente del directorio, de manera trimestral, un informe sobre su gestión que considere la información detallada en el Anexo N° 4. Los informes trimestrales deben ser puestos en conocimiento del presidente del directorio, dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del trimestre. En el caso del oficial de cumplimiento corporativo, se debe presentar un informe trimestral por cada una de las empresas supervisadas por la Superintendencia que formen parte del grupo económico que representan. Dicha información se encontrará a disposición de la Superintendencia.



Artículo 52°.- Informes semestrales

Los informes semestrales elaborados por el oficial de cumplimiento deben ser puestos en conocimiento del presidente de directorio, en el mes calendario siguiente al vencimiento del semestre y remitido a la Superintendencia, mediante el medio electrónico que esta establezca, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que se haya puesto en conocimiento del presidente del directorio.

Los informes semestrales pueden servir para dar cumplimiento a la obligación de presentar el segundo y cuarto informe trimestral, respectivamente, siempre que se incorporen en él los aspectos propios del informe trimestral que no sean parte de los temas revisados en el informe semestral, y que se comunique ello tanto al presidente del directorio, como a la Superintendencia.

El oficial de cumplimiento corporativo debe presentar un primer y segundo informe semestral por cada una de las empresas supervisadas por la Superintendencia que formen parte del grupo económico que representan.

El contenido mínimo de los informes semestrales que debe presentar el oficial de cumplimiento se encuentra en el Anexo N° 4.

Artículo 53°.- Informe sobre la ausencia de operación sospechosa

El oficial de cumplimiento debe informar a la UIF-Perú, trimestralmente, respecto a aquellos meses en los cuales no se ha detectado operaciones sospechosas. Mediante oficio múltiple se comunicará a las empresas, el medio electrónico e instrucciones para el envío del referido informe a la UIF-Perú.

SUB CAPÍTULO III
CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS Y ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS

Artículo 54°.- Conservación y disponibilidad del registro de operaciones

Las empresas deben mantener el registro de operaciones en forma precisa y completa a partir del día en que se realizó la operación y por un plazo de diez (10) años, utilizando para tal fin los medios informáticos, de microfilmación, microformas o similares que sean de fácil recuperación; el cual debe estar a disposición de los órganos jurisdiccionales y autoridades competentes conforme a Ley.

Las empresas deben mantener una copia de seguridad al final de cada trimestre, que se compendia en períodos de cinco (5) años, procedimiento que debe estar acorde con el Plan de Seguridad de Información exigido por la Superintendencia. La copia de seguridad del último quinquenio debe estar a disposición de la Superintendencia y del Ministerio Público, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles de ser requerida.

Artículo 55°.- Conservación de otros documentos

Las empresas deben conservar la demás información relacionada con el sistema de prevención del LA/FT por un plazo de diez (10) años. Esta información comprende tanto la información relacionada con la vinculación y operaciones realizadas por los clientes; así como las políticas, procedimientos y análisis efectuados y demás obligaciones expresamente contempladas en el Reglamento. Para tal efecto, se utilizan medios informáticos, microfilmación, microformas o similares que permitan una fácil recuperación de la información para su consulta y reporte interno o externo a las autoridades competentes conforme a Ley.



Artículo 56°.- Atención de requerimientos de información de las autoridades

Las empresas deben desarrollar e implementar mecanismos de atención a los requerimientos de las autoridades de información asociada al sistema de prevención de LA/FT, tomando en cuenta los plazos y formas dispuestas en la legislación y regulación de la materia.

TÍTULO II
DETECCIÓN Y REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

Artículo 57°.- Señales de alerta

El Anexo N° 5 contiene una relación de señales de alerta que las empresas deben tener en cuenta con la finalidad de detectar operaciones inusuales o sospechosas. Lo anterior no exime a las empresas de considerar otras señales de alerta que pudieran dar origen a la calificación de operaciones que consideren sospechosas de acuerdo con su sistema de prevención del LA/FT. Sin perjuicio de ello, la Superintendencia puede proporcionar información o criterios adicionales que contribuyan a la detección de operaciones inusuales o sospechosas.

Las empresas deben efectuar evaluaciones periódicas sobre la totalidad de las señales de alerta consideradas en la gestión de riesgos LA/FT.

Artículo 58°.- Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)

Las empresas deben comunicar a la UIF-Perú las operaciones detectadas en el curso de sus actividades, realizadas o que se hayan intentado realizar, que según su buen criterio sean consideradas como sospechosas, sin importar los montos involucrados. A estos efectos, se considera buen criterio, el discernimiento o juicio que se forma el sujeto obligado a partir, por lo menos, del conocimiento del cliente y del mercado; abarca la experiencia, la capacitación y la diligencia del sujeto obligado y sus trabajadores, en la prevención del LA/FT.

La comunicación debe ser de forma inmediata y suficiente, es decir, en un plazo que -conforme a la naturaleza y complejidad de la operación sospechosa- permita la elaboración, documentación y remisión del ROS a la UIF-Perú, el cual en ningún caso debe exceder de los quince (15) días hábiles de detectada.

Una operación es detectada como sospechosa cuando dicha categoría puede presumirse luego del análisis y evaluación realizado por el oficial de cumplimiento.

El oficial de cumplimiento debe dejar constancia documental del análisis y evaluaciones realizadas, para la calificación de una operación como inusual o sospechosa, así como el motivo por el cual una operación inusual no fue calificada como sospechosa y reportada a la UIF-Perú, de ser el caso. Las operaciones calificadas como inusuales y el sustento documental del análisis y evaluaciones se conservan por el plazo de diez (10) años, conforme al artículo 55°.

La comunicación de operaciones sospechosas y el ROS que realizan las empresas por medio de sus oficiales de cumplimiento tienen carácter confidencial y reservado. Para todos los efectos legales, el ROS no constituye una denuncia penal.

Artículo 59°.- Contenido del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)

Los ROS deben contener la siguiente información mínima:

- a) Identidad de las personas que intervienen en las operaciones indicando nombres y apellidos completo, fecha de nacimiento, tipo y número del documento de identidad, nacionalidad,



profesión u oficio, domicilio y teléfono, de las personas naturales; así como denominación o razón social, número del Registro Único de Contribuyentes (RUC), objeto social, domicilio, teléfono y nombres y apellidos del representante legal, en el caso de personas jurídicas. Respecto del representante se debe incluir la información requerida para las personas naturales. Lo expuesto resulta aplicable en el caso de ROS sobre clientes, trabajadores, proveedores y/o contrapartes;

- b) Cuando intervengan terceras personas en la operación se debe indicar los nombres y apellidos completos de dichas personas y demás información con que se cuente de estas;
- c) Indicar si han realizado anteriormente una operación sospechosa, señalando la documentación con que se comunicó a las autoridades competentes dicha operación;
- d) Relación y descripción de las operaciones realizadas mencionando las fechas, montos, monedas, cuentas utilizadas, cuentas vinculadas, lugar de realización, documentos de sustento que se adjuntan al reporte, como transferencias de fondos, copias de cheques, estados de cuenta, etc.;
- e) Irregularidades y consideraciones que llevaron a calificar dichas operaciones como sospechosas; y,
- f) Demás información y documentación que se considere relevante.

Artículo 60°.- Forma de envío

Las empresas comunican a la UIF-Perú el ROS y la documentación adjunta o complementaria mediante el sistema de reporte de operaciones sospechosas en línea - ROSEL utilizando para ello la plantilla ROSEL u otro que haga sus veces, publicado en el portal de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, habilitado por la Superintendencia para tal efecto.

El oficial de cumplimiento es responsable del correcto uso del sistema ROSEL y de toda la información contenida en la plantilla respectiva y sus anexos, u otro que haga sus veces, debiendo adoptar las medidas necesarias para asegurar la exactitud y veracidad de la información, su reserva y confidencialidad.

Artículo 61°.- Confidencialidad

En ningún caso debe consignarse en el ROS la identidad del oficial de cumplimiento ni de la empresa, ni algún otro elemento que pudiera contribuir a identificarlos, salvo los códigos o claves secretas asignadas por la UIF-Perú.

Asimismo, en todas las demás comunicaciones de la empresa dirigidas a la Superintendencia, el oficial de cumplimiento solo debe utilizar los códigos o claves secretas asignadas.

TÍTULO III
DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT

Artículo 62°.- Auditoría Interna

El diseño y aplicación del sistema de prevención del LA/FT debe ser evaluado por su Unidad de Auditoría Interna. La evaluación del referido sistema debe comprender, como mínimo, los aspectos sobre la materia señalados en el Reglamento de Auditoría Interna. Las conclusiones de dicha evaluación deben presentarse a la Superintendencia mediante un informe especial anual, como anexo del informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente al segundo semestre.



Artículo 63°.- Auditoría Externa

Las sociedades de auditoría externa deben emitir anualmente un Informe Independiente de Cumplimiento, sobre la evaluación del sistema de prevención del LA/FT de las empresas, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Auditoría Externa.

TITULO IV
CORREDORES DE SEGUROS

Artículo 64°.- Sistema de prevención de LA/FT para corredores de seguros

64.1 Los corredores de seguros que intermedian seguros que generen ingresos operativos por montos iguales o superiores a quinientos mil (S/. 500,000.00 nuevos soles), deben contar con un sistema de prevención del LA/FT para evitar que los productos y/o servicios que ofrecen al público sean utilizados con fines ilícitos vinculados con el LA/FT, considerando para tal efecto los artículos 65° y 66° del Reglamento.

64.2 Los corredores de seguros que no se encuentren comprendidos en el supuesto detallado en el numeral 64.1, deben nombrar un oficial de cumplimiento considerando lo dispuesto en los literales a), b), c) y d) del artículo 65.2 y comunicar las operaciones sospechosas que detecten en el marco de lo dispuesto por el artículo 66° del Reglamento. La Superintendencia podrá requerirles información adicional.

Artículo 65°.- Características del sistema

65.1 Para efectos de la implementación del sistema de prevención del LA/FT, los corredores de seguros observan las siguientes disposiciones:

- a) **Clientes.-** Se consideran clientes de los corredores de seguros, a aquellos comprendidos en el literal a) del artículo 27° del Reglamento, con los cuales se relacionen en ejercicio de su labor de intermediación en la contratación de seguros.
- b) **Conocimiento del cliente y debida diligencia.-** El conocimiento del cliente requiere por parte de los corredores de seguros, la identificación fehaciente de este, considerando para tal efecto las etapas de la debida diligencia en el conocimiento del cliente a las que hace referencia el artículo 29° del Reglamento y los siguientes aspectos:

Para el caso de los seguros que se encuentren sujetos al régimen simplificado de debida diligencia, solo es aplicable la información mínima requerida para la identificación del cliente persona natural o jurídica, según corresponda, y los procedimientos de verificación, establecidos en la regulación vigente.

Para el caso de los seguros distintos de los señalados en el párrafo precedente, son aplicables los requerimientos establecidos en el artículo 30° del Reglamento, sobre información mínima y verificación de clientes.

- c) Cuando corresponda, resulta aplicable el régimen reforzado de debida diligencia al que hace referencia el artículo 32° del Reglamento, según corresponda.

Los corredores de seguros deben verificar que las solicitudes de seguros de sus clientes contengan la información de identificación mínima, según corresponda.



65.2 Oficial de cumplimiento.- La designación del oficial de cumplimiento para el caso de los corredores de seguros debe cumplir con lo siguiente:

- a) Cuando el corredor de seguros sea persona jurídica, la designación del oficial de cumplimiento corresponde al directorio y -de no contar con directorio-, la designación está a cargo del gerente general, titular-gerente, administrador u órgano equivalente, según corresponda. El oficial de cumplimiento no requiere necesariamente tener rango gerencial ni desarrollar sus actividades a dedicación exclusiva, salvo que la Superintendencia determine lo contrario, tomando en consideración, entre otros aspectos, el tamaño de la organización, su complejidad, nivel de riesgos operativos, administrativos y legales, así como el volumen promedio de transacciones u operaciones, número de personal, movimiento patrimonial, además de las particulares características del sujeto obligado.
- b) Cuando el corredor de seguros sea persona natural o persona jurídica con un solo titular (EIRL o similares) con menos de diez (10) trabajadores, el oficial de cumplimiento puede ser el propio corredor de seguros o titular de la persona jurídica.
- c) Cuando el oficial de cumplimiento sea persona distinta al propio corredor de seguros o único titular de la persona jurídica, se requiere que dependa laboralmente del corredor de seguros o único titular de la persona jurídica y goce de autonomía e independencia en el ejercicio de las responsabilidades y funciones que le asigna para tal efecto la Ley, el Reglamento de la Ley y el Reglamento en su artículo 10°.
- d) El oficial de cumplimiento debe reunir, por lo menos, los siguientes requisitos:
 - i. Tener conocimiento respecto a las actividades propias del corredor de seguros.
 - ii. No estar incurso en los impedimentos establecidos en el artículo 4° del Reglamento del Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros aprobado por la Superintendencia.
 - iii. No ser ni haber sido el auditor interno del sujeto obligado, según corresponda, durante los seis (6) meses anteriores a su nombramiento.
 - iv. En caso de que el oficial de cumplimiento sea el propio corredor o único titular de la persona jurídica, deberá mantener la condición de estar habilitado en el Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros, según corresponda.
 - v. Otros que establezca la Superintendencia.

Los requisitos a que se refieren los literales ii) y iii) antes señalados pueden constar en declaración jurada.

- e) La designación del oficial de cumplimiento debe ser comunicada a la Superintendencia, por el directorio y -de no contar con directorio-, el gerente general, titular-gerente, administrador o el que haga sus veces, según lo disponga el estatuto social del sujeto obligado, o el propio sujeto obligado tratándose de los corredores a que se refiere el literal b) del numeral 65.2, mediante carta dirigida a la UIF-Perú, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de producida, adjuntando la documentación que sustente el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el literal precedente.
- f) El oficial de cumplimiento emite un informe anual sobre la evaluación del cumplimiento de las presentes normas aplicables al corredor de seguros como sujeto obligado, que debe contener al menos lo siguiente:
 - i. Estadística anual de operaciones inusuales y ROS remitidos a la UIF-Perú, discriminando la información por mes, tipo de seguro y montos involucrados, entre otros aspectos que se considere significativos.



- ii. Descripción de nuevas tipologías de operaciones inusuales y operaciones sospechosas detectadas y reportadas, en caso las hubiere.
- iii. Políticas de conocimiento del cliente y del trabajador.
- iv. Número de capacitaciones recibidas por el sujeto obligado, trabajadores y el oficial de cumplimiento, en materia de prevención del LA/FT, incluyendo una breve descripción de la capacitación y el número de personas capacitadas.
- v. Detalle de las actividades realizadas para el cumplimiento del código de conducta y manual, indicando los casos de incumplimiento y las medidas correctivas adoptadas.
- vi. Relación de las principales actividades realizadas para el cumplimiento de las normas relativas al registro de operaciones, considerando los supuestos aplicables a las empresas de seguros, detallados en el artículo 49°.
- vii. Mantenimiento de registros de operaciones y demás información relacionada con el sistema de prevención del LA/FT por el plazo legal.
- viii. Verificación de la documentación personal, en cuanto a su contenido y actualización.
- ix. Acciones adoptadas respecto de las observaciones que hubiere formulado la Superintendencia, de ser el caso, y la oportunidad de estas.
- x. Otros que el oficial de cumplimiento considere relevante.
- xi. Otros que determine la Superintendencia mediante comunicación al oficial de cumplimiento.

g) El informe anual es puesto en conocimiento del sujeto obligado dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del año calendario y remitido a la Superintendencia dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la precitada comunicación.

Si el sujeto obligado es una persona jurídica, el informe anual será dirigido al presidente del directorio y -de no contar con directorio-, al gerente general, titular-gerente, administrador u órgano equivalente, según corresponda.

65.3 Código de Conducta y Manual.- El código de conducta y el manual de los corredores de seguros deben contener políticas y aspectos generales sobre prevención del LAFT y tendrán en cuenta los alcances de su función de intermediación establecido en el artículo 338° de la Ley General.

El manual debe ser aprobado por el Directorio, y -de no contar con Directorio-, por el gerente general, titular-gerente, administrador o el que haga sus veces según lo disponga el estatuto social del sujeto obligado, o el propio sujeto obligado tratándose de los corredores a que se refiere el literal b) del numeral 65.2. El manual debe contener como mínimo, lo siguiente:

- a) Definiciones relevantes relacionadas a la prevención y gestión de LA/FT.
- b) Objetivo del Manual.
- c) Políticas referidas a la prevención y gestión de los riesgos de LA/FT.
- d) Programas de capacitación.
- e) Lineamientos generales establecidos en el código de conducta de las empresas con el objetivo de gestionar los riesgos LA/FT.
- f) Sanciones internas, contempladas en el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa, cuando corresponda, por incumplimientos del código de conducta, el manual, el sistema de prevención del LA/FT en su conjunto o las disposiciones legales vigentes.

Los corredores de seguros pueden establecer convenios con el fin de contar con un código de conducta y un manual único a nivel gremial.

65.4 Programas de Capacitación.- Son aplicables las disposiciones del Reglamento, con las siguientes particularidades:



- a) Cuando los sujetos obligados sean corredores de seguros señalados en el literal c) del numeral 65.2, las capacitaciones podrán ser dictadas por el oficial de cumplimiento, quien en este caso emite una constancia de capacitación.
- b) Los corredores de seguros pueden establecer convenios con el fin de capacitarse a nivel gremial, para dar cumplimiento a la exigencia señalada en el punto b) del numeral 65.2.

Artículo 66°.- Reporte de operaciones sospechosas

Los corredores de seguros reportan las operaciones sospechosas conforme lo establecido en el Título II del Reglamento, tomando en consideración, de manera especial, lo dispuesto en el Anexo N° 5. Asimismo, deben informar, trimestralmente, respecto a aquellos meses en los cuales no se ha detectado operaciones sospechosas. Mediante oficio múltiple se comunica, el medio electrónico e instrucciones para el envío del referido informe a la UIF-Perú.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera.- Anexos

Forman parte integrante del presente Reglamento, los siguientes anexos:

Anexo N°1: Listados que contribuyen a la prevención del LA/FT.

Anexo N°2: Contenido básico del manual de prevención y gestión de los riesgos del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

Anexo N°3: Criterios mínimos para el sistema de calificación de aceptación de nuevos clientes.

Anexo N°4: Contenido mínimo de los informes del oficial de cumplimiento.

Anexo N° 5: Señales de Alerta.

Segunda.- Plan de Adecuación

En un plazo que no excederá de noventa (90) días de la vigencia del Reglamento, las empresas deben remitir a esta Superintendencia un plan de adecuación a las disposiciones contenidas en la norma, de acuerdo al formato que para tal efecto establezca la Superintendencia, el que será comunicado por oficio múltiple. Dicho plan debe incluir un diagnóstico de la situación existente en la empresa al momento de la vigencia del Reglamento, las acciones previstas para la total adecuación y su cronograma, con excepción de la exigencia a la que hace referencia el segundo párrafo del artículo 22° del Reglamento, que en ningún caso puede exceder del 1 de setiembre del 2015. Asimismo, se debe señalar los funcionarios responsables del cumplimiento de dicho plan.

Las empresas deben presentar el plan de adecuación al que hace referencia el precitado artículo 22° en el plazo señalado en el párrafo precedente; sin embargo, en función a su tamaño y número de clientes, cada empresa determinará el plazo que requiere para dar cumplimiento a la exigencia señalada en dicho artículo. La Superintendencia, previa evaluación, puede requerir la modificación del plan o plazo establecidos por la empresa para su cumplimiento.

Tercera.- Exigibilidad para corredores de seguros y cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público

En el caso de los corredores de seguros y cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público, será exigible lo establecido en el Reglamento a partir del 1 de enero del 2015.

Cuarta.- Lineamientos por sectores supervisados

La Superintendencia podrá establecer lineamientos y documentos que contengan buenas prácticas relacionadas al sistema de prevención de LA/FT, para cada sector supervisado por la Superintendencia.



Quinta.- Exoneración de disposiciones contempladas en el Reglamento

Tomando en cuenta, entre otros aspectos, el nivel de riesgo LA/FT que enfrenta la empresa, el tamaño de la organización, complejidad y volumen de sus operaciones, podrá requerirse la exoneración específica de requerimientos normativos, para tal efecto se debe:

- a) Hacer referencia expresa a los aspectos cuya exoneración se requiere.
- b) Indicar la forma en la que la empresa contará con un sistema de prevención del LA/FT aun cuando no se dé cumplimiento a la exigencia cuya exoneración se requiere.

Esta Superintendencia puede suspender en cualquier momento las autorizaciones especiales concedidas a que hace referencia esta norma, cuando en el ejercicio de su funciones observe que las circunstancias lo ameritan, que la empresa ha incumplido con las obligaciones previstas, o que la autorización concedida no ha contribuido a una mejora de su práctica de prevención y gestión de riesgos LA/FT, lo que comunicará a la empresa mediante oficio.

Sexta.- Cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento

La información que permita acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento debe encontrarse a disposición de la Superintendencia.

Artículo Segundo.- Incorporar el procedimiento N° __ Exoneración del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo”, en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, aprobado mediante Resolución SBS N° 3082-2011 y sus normas modificatorias, cuyo texto se anexa a la presente resolución y se publica en el portal institucional (www.sbs.gob.pe), conforme con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 29091, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2008-PCM.

Artículo Tercero.- La presente resolución entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, fecha en la que quedan derogadas las Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, aprobadas por la Resolución SBS N° 838-2008.

Los anexos que forman parte del Reglamento aprobado por el Artículo Primero, se publican en el Portal institucional (www.sbs.gob.pe), conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS.

Regístrese, comuníquese y publíquese.